



CUADERNOS #5
México 2019-1



índice

PRESENTACIÓN Josefina Morales	3
LA MIRADA AUSENTE Beatriz Stolicz	4
AUSTERIDAD PARA TODOS: ¿MENOS LOS PARÁSITOS FINANCIEROS? Alejandro Álvarez Béjar	10
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN (4T) Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA DEL GOBIERNO DE AMLO Arturo Guillén	13
MÉXICO 2019: EL DESAFÍO INELUDIBLE DE LA CONTRAHEGEMONÍA Luis Arizmendi	17
LA CORRELACIÓN DE FUERZAS EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Magdalena Galindo	26

PRESENTACIÓN

LOS DESAFÍOS TEÓRICO-HISTÓRICO-POLÍTICOS DE MÉXICO

Josefina Morales

En las elecciones presidenciales del primero de julio de 2018, el pueblo de México obtuvo un triunfo democrático inédito en su historia contemporánea: con su masiva participación y su masiva votación por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hirió de muerte al caduco y corrupto régimen político y se abrió la puerta a una nueva etapa de la lucha de clases en nuestro país.

El triunfo electoral resumió las luchas sociales y políticas de las últimas tres décadas. Luchas de diverso alcance. Y, al mismo tiempo, asumió la dimensión histórica de la lucha nacional viva en la conciencia popular: la Revolución de Independencia, la Reforma y la Revolución. Así se plantea y se resume el desafío histórico de la Cuarta Transformación (4T).

Hasta el 30 de junio de ese año, el saldo de cuatro décadas de una política económica neoliberal codificada constitucionalmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde el primero de enero 1994, el día del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), era una catástrofe para el país.

El pensamiento crítico de nuestro país condensaba las características estructurales de nuestro país en una crisis de múltiples dimensiones: económica, política, social, de derechos humanos, de justicia, ambiental... Un saldo que configuraba un

capitalismo monopolista neocolonial de crecimiento mínimo con recesiones recurrentes y profundas desigualdades económicas, sociales, sectoriales y regionales en un país con 120 millones de habitantes y dos millones de kilómetros cuadrados. Un país con una frontera de 3 000 km con la potencia imperialista hegemónica mundial, Estados Unidos, desde 2017 bajo la presidencia del neofacista, racista y homofóbico Donald Trump que había designado, desde su campaña, a México como el enemigo número uno de su país.

El triunfo electoral, fue un golpe profundo al régimen político, pero no desapareció la crisis multidimensional. Enfrentar la corrupción, la violencia criminal, la descomposición profunda del Estado y emprender el rescate y reconstrucción del Estado, de la economía, de la sociedad, plantea enormes desafíos.

Asimismo, los desafíos teórico-políticos son amplios y diversos. Entrelazar la coyuntura en perspectiva crítica, evaluar la correlación de fuerzas, enfrentar los desafíos organizativos, son trabajos mayúsculos para una gama dispersa de luchas en resistencia.

Las enseñanzas de las últimas experiencias democrático-populares en Nuestra América, son una lección abierta para nuestro país. La lucha sigue.

LA MIRADA AUSENTE¹

Beatriz Stolowicz²

Felicito a las compañeras y compañeros estudiantes que organizaron este foro de balance del primer año desde la rebelión electoral y seis meses del nuevo gobierno. Seguramente habrá varios ejercicios de balance en estos días, y estaba pensando que habría que hacer el balance de los balances.

Porque no serán iguales los balances de quienes han vivido 30 años de fraudes, que los de quienes decidieron dejar de abstenerse o votan por primera vez y viven un triunfo que se consuma sin mayores dificultades. Serán distintos los balances de quienes han entregado muchos años de su vida a la lucha por el cambio, o los que sin demasiado esfuerzo reciben los efectos del cambio. No serán iguales los balances de quienes han batallado muchísimo para crear organizaciones sociales y organizaciones políticas, que los de los que observan el accionar de las organizaciones. No es lo mismo si se tiene conocimiento de las otras experiencias de gobierno en América Latina, que si se tiene un horizonte sólo local. Tampoco serán iguales los balances de quienes han tenido la experiencia de gestión, que exige resolver problemas “para mañana” a como dé lugar, de los que evalúan a los gobiernos

post facto. Serán distintos los balances de quienes asumen la intrincada relación de economía y política, a los de quienes ven sólo decisiones individuales. Y habrá muchos otros abordajes.

Ciertas combinaciones de algunos de los abordajes mencionados pueden dar como resultado una suerte de dicotomía que tiene, de un lado, un realismo que deriva en posibilismo conformista y, del otro lado, una absolutización de lo deseable que sólo contabiliza insuficiencias. Cuando se llega a miradas dicotómicas de este tipo se entra en un pantano, no sólo analítico sino también práctico. Porque el realismo, siempre necesario, no tendría que transformarse en posibilismo conformista, en dar por hecho que nada más o distinto se puede hacer, terminándose por administrar lo existente, aunque se haga mejor. Y por otro lado, si sólo se piensa en lo deseable sin tomar en cuenta los condicionamientos reales, se cae en un purismo desmovilizador que bloquea la búsqueda de transformar lo existente para reducir los obstáculos que impiden avanzar hacia lo necesario. Los dos lados de la dicotomía terminan por frustrar las posibilidades de cambio. Entonces, se trata de identificar los obstáculos que impiden

1. Intervención en el foro *A un año del primero de julio: retos, desencuentros y aciertos de la 4T*, organizado por el Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco, 26 de junio de 2019, y en el que participaron también Armando Bartra y Rafael Barajas.

2. Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura (UAM-X).

a corto plazo hacer más o distinto, pero no para aceptarlos resignadamente, sino buscando cómo generar las condiciones para eliminar o reducir esos obstáculos. Y, desde luego, eso exige tener un horizonte muy claro de hacia dónde hay que caminar para que el cambio sea verdadero.

Los obstáculos que hoy enfrentamos son mayores que los que enfrentaron otras fuerzas de izquierda y progresistas latinoamericanas cuando hace 18, 15 o 12 años llegaron al gobierno nacional. En estos años que corrieron se han acumulado en México más entreguismo y despojo del territorio y a los que viven de su trabajo, con el correlato de violencia y represión, cuyas escalofriantes cifras todos conocemos. Fueron años en los que se ejecutaron más cambios en el Estado y en la legislación para hacer legal y permanente el despojo, de lo que habían encontrado en otros países. El resultado buscado es la tremenda concentración de la riqueza transferida al gran capital, tanto en actividades legales como ilegales. Los grandes capitales de semilla mexicana, que son transnacionales, tienen una magnitud y poder económico, y por lo tanto político y social, mucho mayores que en otros países, quizá sólo comparables a Brasil. Y tenemos la singularidad de ser frontera con Estados Unidos, con todo lo que implica. Y de que ya son 25 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha transformado radicalmente la estructura económica del país, haciéndonos totalmente dependientes, con la gravísima pérdida de la soberanía alimentaria y de la producción de otros bienes de consumo y servicios, que de por sí opera como

un factor de potencialidad bélica, más su formalización militar en la Iniciativa Mérida en 2007. Los enemigos del pueblo mexicano son tremendamente poderosos, a eso nos enfrentamos.

La importancia de la rebelión electoral de hace un año no puede minimizarse. Pero hay que interpretarla correctamente. La voluntad de más de 30 millones, más del 53 por ciento del electorado, constituye una gran fuerza electoral. Pero no representa una fuerza social y política equivalente.

No conocemos con certeza quiénes son y qué piensan esos 30 millones. Hace un año, con toda razón, Julio Boltvinik planteó que era imperioso estudiar a ese universo, cosa que aún no se ha hecho hasta donde yo sé. Los datos de 2006 y 2012 nos muestran que hay un voto duro progresista, de izquierda y centroizquierda, bien definido políticamente, de al menos 15 millones. No sabemos cuánto creció este voto duro en los últimos 6 años. La duplicación del voto por López Obrador expresó sin duda una respuesta a la acumulación de agravios de todo tipo y a la sensación de estar frente al abismo, a la búsqueda de una tabla de salvación frente a la destrucción generalizada del país. En muchos millones fue quizá una decisión de carácter defensivo. Que no es lo mismo que cuando los votos denotan una fuerza social y política en ofensiva.

Considero que es obligación reconocer la insuficiente fuerza social, que no ha podido frenar el despojo y la destrucción. Esta debilidad es, en primer lugar, una consecuencia dramática de la ofensi-

va dominante que se hizo simultáneamente en todos los planos, en lo económico, en lo social, en lo ideológico, con violencia estatal y violencia paramilitar. En cada rincón del país hubo en estos años –y hay– heroicas luchas de resistencia, sobre todo contra el despojo territorial. También ha sido admirable la lucha de los defensores de derechos humanos, que no se han dado abasto. Pero son luchas dispersas, sin articulación, que no producen una potencia colectiva suficiente. La ofensiva dominante contra los trabajadores ha debilitado a los sindicatos, por eso es más que admirable la persistente lucha de los maestros de la CNTE. En los años recientes también se debilitó la lucha de los universitarios. Muestra de ello es que en estos brutales años no se logró convocar a un paro nacional, o a una movilización nacional simultánea contra el neoliberalismo. En 2006 había más capacidad organizativa y más articulación de luchas, que ahora. La fuerza social de la que se carece se busca compensar con una rebelión electoral.

Algo parecido ocurrió desde finales de los ochenta y comienzos de los noventa en varios países de la región. Eran los años de la “desertificación neoliberal”, como lo ha caracterizado nuestro amigo y colega brasileño Ricardo Antunes. Privatizaciones, desempleo, liquidación de salarios y derechos sociales debilitaron a los sindicatos y organizaciones sociales. Mucha gente entendió que la única manera de defenderse era generar cambios desde los gobiernos, y dieron los votos para los primeros triunfos electorales de la izquierda en municipios y capitales de varios países, 20 años después de la experiencia chilena

con Allende. El de Cuba era, por entonces, el único gobierno nacional.

Por el lado de la izquierda política mexicana, también han sido años de crisis y debilitamiento. Tras la deriva conservadora y prácticamente desaparición del PRD, sólo queda con presencia electoral el Partido del Trabajo, partido pequeño pero persistente. La creación del Movimiento de Regeneración Nacional como asociación civil en 2011 por impulso de López Obrador, y su registro como partido en 2014, tiene como núcleo constitutivo a la izquierda histórica. Pero nace principalmente como un instrumento electoral, que en 4 años realiza la hazaña de tener presencia en todo el país, hacer una campaña electoral de masas y cubrir todas las mesas electorales, pero que todavía no completa su maduración como partido. Y, como efecto prolongado de los fraudes, que generó bastante fatalismo, para ganar hace alianzas con emigrados de última hora de los partidos de derecha, por lo que no todos los parlamentarios o gobernantes estatales y municipales que ganaron por Morena son de izquierda. Esto ya ha generado muchos problemas. En la integración del gobierno también se expresan esas alianzas para frenar el fraude.

En este escenario de dispersión de la fuerza social y política populares, se conquista un tremendo triunfo electoral. Y esto es posible porque López Obrador logra representar esa diversa, dispersa, pero confluyente necesidad de salvarse del abismo. Este es un fenómeno singular que tiene que reconocerse y apreciarse. Pero esa base electoral puede ser fluctuante, porque no expresa una acumulación de

fuerzas ni una adhesión programática homogénea por cambios de fondo. Ha hecho posible que se emprendan cambios desde el gobierno, un parteaguas en nuestra historia reciente. Pero las poderosas fuerzas que hay que confrontar para hacer cualquier mínimo cambio, aunque han perdido espacios institucionales, operan todavía desde el Estado y con todo su poder en todos los ámbitos de la sociedad. No bastan el gobierno ni la voluntad del presidente. En los seis meses transcurridos parece que esto no se ha comprendido.

Los márgenes de acción para el gobierno son más estrechos de lo que algunos pudieron pensar. Hoy sabemos, gracias a las denuncias del propio gobierno, que la descomposición es mayor de lo que sabíamos. Recibe un país destruido y un Estado vaciado, gravemente endeudado, lo que otorga una tremenda capacidad de presión al capital financiero. Un Estado lleno de candados jurídicos para asegurar por varias décadas que siga transfiriendo riqueza social al gran capital: son las leyes entreguistas como la de asociación público-privada entre muchas otras; la autonomía de órganos de decisión de la acción económico-social estatal, impermeables a cambios políticos en la orientación del gobierno y que tienen en sus consejos dizque “ciudadanizados” a representantes del gran capital.

Hasta la voluntad de desplegar acciones para atenuar la lacerante situación social se topa con la dificultad de desmontar las políticas sociales neoliberales, que no sólo han transferido recursos públicos para ganancias privadas, sino que han armado un microcorporativismo clientelar resistente.

Esto es muy importante, porque no se trata sólo de cambiar las políticas públicas, sino que nos topamos con reconfiguraciones sociales e ideológicas que dan cuenta de que la hegemonía dominante sigue operando.

También ocurre que, como la gente ha perdido el miedo, exige a este gobierno la reparación inmediata de los agravios cometidos por gobiernos anteriores, lo que es legítimo pero introduce una conflictividad peculiar. Y mucho más cosas que vamos observando.

Comparado con otras experiencias en la región, el remezón inmediato del Estado para moralizarlo y recuperar las funciones públicas es bien importante. Ha sido la vía, incluso, para intentar generar una mayor autonomía relativa del Estado respecto del poder económico, aunque lo intenta con movimientos de equilibrios inestables para ganar tiempo. Pero no puede prescindir de él, y el intento de mayor autonomía relativa se debilita en la definición de proyectos de “desarrollo” cuestionables, que se mantienen en los cánones del gran capital. No sólo es un problema de desventaja en la relación de fuerzas, o incluso de convicciones ideológicas de sectores del gobierno: es que no hay proyectos distintos que estén proponiendo alternativas para los problemas a escala nacional. Esta también es una expresión de la debilidad de la que hablé antes.

Se manifiesta oposición, pero no se actúa para empujar cambios que vayan modificando la relación de fuerzas. Voy a dar algunos ejemplos.

Cuando el senador Monreal presentó el

proyecto para exigir a los bancos que eliminaran o disminuyeran comisiones, que limitarían las ganancias escandalosas de los bancos despojando a los que viven de su trabajo, era la oportunidad para crear un gran movimiento barzonista urbano para empujar esa iniciativa. ¿Qué pasó? Nada. Los únicos que se manifestaron fueron los bancos, en contra, desde luego. Y se retiró o postergó.

En la crisis en curso con Estados Unidos tampoco se crea una movilización nacional desde abajo para repudiar las presiones y chantajes de Trump. Porque para actuar con rapidez y eficacia se necesita tener un movimiento popular organizado, articulado. Pero tampoco se hace el esfuerzo de convocarlo en esta coyuntura. En 2003 se hicieron marchas muy grandes contra la invasión de Estados Unidos a Irak, ahora nada. Y es el caso del T-MEC, como parte de esta coyuntura, que lleva meses radicado para su discusión y ratificación en el Senado. El lunes 17 de junio, una veintena de organizaciones sociales y más de 80 organizaciones de derechos humanos enviaron una carta al Senado para solicitar su debate en Parlamento Abierto. El Senado lo ratificó dos días después, sin convocar al Parlamento Abierto. Pero es recién después de esta ratificación que se publican artículos muy importantes que argumentan su rechazo y que se da a conocer de ésa y otras cartas enviadas al Senado. ¿Por qué esperar que esa discusión pública la convocara el Senado, integrado también por la derecha, y no haberla llevado a cabo por las organizaciones desde mucho antes? Así fue en los años noventa, muchos meses de debate público contra la apro-

bación del TLCAN.

Y en nuestro propio campo de acción universitaria: poco después del triunfo electoral supimos de la propuesta de dirección del Conacyt y nos fuimos enterando de los cambios que promoverían. Era el momento para multiplicar las discusiones sobre los efectos destructivos sobre la creación de conocimiento y los posgrados de las políticas de evaluación y financiamiento durante muchos años. Podíamos haber construido colectivamente una propuesta programática para entregar a la nueva dirección cuando asumiera, y pasaron seis meses y tampoco se hizo nada. Sólo fueron los sectores vinculados a las empresas los que se lanzaron contra las propuestas de la nueva dirección.

Estos son síntomas de lo que dije antes. Denotan, además, concepciones sobre lo político y la política que vienen de tiempos atrás: sólo se sabe actuar como oposición, no como sujetos de construcción de fuerza para cambiar su balance entre dominantes y dominados. Se dan “like’s” o “don’t like’s” a lo que hace el gobierno. Pero no se usan los espacios que se han abierto con, y por, el nuevo gobierno, ni se abren otros de manera oportuna en los ritmos vertiginosos en que está pasando todo, con el propósito de empujar los cambios, para darle fuerza al gobierno y a las fuerzas aliadas en el Estado para que pueda tener mayor autonomía relativa respecto al poder del gran capital. En el fondo sigue predominando la idea de que el poder está sólo en el Estado. En la práctica hay oposición al gobierno, no al gran capital y a sus presiones sobre el Estado, aunque haya un discurso antica-

pitalista. Una excepción muy alentadora en este período han sido las huelgas en Matamoros.

Entonces, pienso que no se puede explicar las debilidades sociales y políticas sólo por la ofensiva brutal de los dominantes. También tiene que ver con las concepciones y las prácticas. Esta es una coyuntura propicia para discutirlos, porque las saca del terreno de la escolástica en el que suelen discutirse, las plantea de manera muy viva. Y, por supuesto, se nos abre también un rico campo de debate para las ciencias sociales. Hay que mirar hacia América Latina, y ver que los errores desde abajo también tienen consecuencias. Pero el tiempo corre, no nos espera. Qué bueno este impulso de las y los compañeros para estar a la altura. Muchas gracias.

AUSTERIDAD PARA TODOS: ¿MENOS LOS PARÁSITOS FINANCIEROS?

Alejandro Alvarez Béjar¹

A seis meses del nuevo gobierno la austeridad presupuestal, la violencia, la militarización, las concesiones a Donald Trump, el asambleísmo y la religiosidad como cultura de gobierno, son auténticas piedras en el zapato, que pueden trabar avances a lo largo de los próximos años.

Las políticas de austeridad bajo el neoliberalismo han tenido una doble utilidad: la primera, disminuir el tamaño del Estado para abrir nuevos espacios a un sector privado tan “ansioso de invertir” como reacio a concretarlo si no tiene asegurado rendimientos altos y a largo plazo. La segunda, fue poner a toda la sociedad a trabajar para pagar las deudas acumuladas con los fallidos negocios privados y los quebrantos públicos (crisis financieras en 1976, 1983, 1987, 1994, 2001, 2008-09), con cargo a las finanzas estatales.

Exacerbada la austeridad a extremos absurdos en una economía estancada, el peor despilfarro para México está en destinar 725 mil millones de pesos del presupuesto (del orden de 37 mil millones de dólares, para cubrir el servicio de una deuda pública ilegítima e insostenible).

En México, la 4T supone que la austeridad del gasto nos sacará del hoyo del estancamiento disfrazado de estabilidad, pero su aplicación extrema en aras de un “superávit fiscal” está agravando la caída

de la actividad económica, el desempleo, el desabasto en áreas de la salud pública y de la educación y el parasitismo financiero sobre las finanzas públicas. Todo lo cual ha sido aprovechado inteligentemente por intelectuales neoliberales, políticos panistas, empresarios farmacéuticos, energéticos, por medios de comunicación y poderes fácticos como las calificadoras de riesgo, el ejército y las iglesias. Argumentando “la defensa del Estado de Derecho”, los conservadores y la ultra-derecha han apostado a una alianza con el Poder Judicial para bloquearle muchas iniciativas al gobierno asediándolo políticamente.

El estancamiento económico y la austeridad extrema son caldo de cultivo de la descomposición social que ha recrudecido la violencia en el país, siempre siguiendo unos patrones que más parecen acción de “fuerzas en operaciones especiales” que persiguen un impacto político fríamente calculado en la gobernabilidad, o que son literalmente espasmos reveladores de la perversa dinámica que nos deja el saldo brutal de diez años de “guerra contra las drogas”.

Vivimos desde hace varios años una delicada crisis humanitaria propia de un país en guerra (con centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, miles de fosas clandestinas por

¹ Profesor titular de Tiempo Completo en la Facultad de Economía, UNAM.

todo el país, cientos de periodistas y militantes de organizaciones sociales asesinados); pero habiendo ofrecido el fin de esa guerra, el Poder Legislativo dominado por Morena dio luz verde a una Guardia Nacional que está realmente en manos de las fuerzas armadas que ahora, por compromisos con Donald Trump, tiene la “novedosa” función de contener las migraciones de Centroamérica y de México.

Se rechazó pagar el muro que quiere Trump en la frontera México-EU, pero sólo para caer en el dispendio de movilizar a los militares para contener en la frontera sur de México unas migraciones que son producto directo de las políticas de libre comercio de EU, del cambio climático, del hambre y de la violencia política neoliberal de origen multi-diverso.

No es entonces trivial que, desde los territorios zapatistas de Chiapas, personalidades democráticas de México y el mundo, nos alerten sobre el agravamiento del cerco militar al calor de la estrategia de contención de flujos de migrantes, como si se preparara una guerra contra los indígenas que alzaron su voz en contra de los proyectos de desarrollo que omiten una consulta rigurosa con las comunidades.

Por todo eso y más, urge una profunda recomposición del tejido social, pero eso no puede hacerse convergiendo con el proyecto cultural de la derecha neo-conservadora en el poder de Estados Unidos, que recurre a la Iglesia Evangélica como su gran aliada política nacional e internacional, desplegando actitudes misóginas, homofóbicas, racistas, contra el aborto, antisemitas y anti-islámicas, más otras

cuestiones por el estilo.

Aquí, como lo ha advertido con oportunidad el equipo de Carmen Aristegui, la decisión reciente de cambiar reglamentos secundarios de la Secretaría de Gobernación para replantear silenciosa pero radicalmente las relaciones Estado-Iglesias, estuvo precedida de la apertura de espacios en el diseño de la estrategia gubernamental (Plan Nacional de Desarrollo), ha seguido con concesiones por el IFETEL de espacios radioeléctricos a una iglesia disfrazada de ONG, colocando a sus líderes como oradores principales en mítines como el de Tijuana, abriendo recintos como Bellas Artes para celebraciones personales de líderes religiosos que luego caen encarcelados y despejando la vía para regresarles el registro como partidos políticos. Todas ellas, son medidas que apuntan en el peligroso sentido de cambiar la histórica raíz laica del Estado Mexicano. ¿Quién y a cuento de qué, promueve eso? ¿Por qué se dio tanto peso legislativo al Partido Encuentro Social, si no juntó votos ni para sostener su registro?

Y por último, en el campo de las consultas a modo y las decisiones asambleísticas sobre proyectos de desarrollo o inversiones públicas de alcance local, regional o nacional significativo, las impugnaciones ya se acumulan por la izquierda y por la derecha, con la diferencia de que la derecha está apoyándose en el Poder Judicial (como algunos integrantes de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción que le achacan al gobierno casi 30 violaciones del Estado de Derecho), mostrando que la lentitud y torpeza en unas decisiones contrasta con la rapidez y ligereza en otras,

dejando las consultas a las comunidades directamente afectadas en un peligroso limbo, políticamente costoso. Es cierto: sabíamos que el camino era largo y sinuoso, pero será muy difícil de concluir con éxito llevando estas piedras en los zapatos.



LA CUARTA TRANSFORMACIÓN (4T) Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA DEL GOBIERNO DE LOPEZ OBRADOR

Arturo Guillén¹

INTRODUCCIÓN

Está por cumplirse un año del triunfo arrollador –una verdadera insurgencia popular pacífica– de Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales y seis meses desde su arribo al gobierno. Los cambios introducidos por su administración han sido múltiples y trascendentes, tanto en el terreno de la estrategia económica como en los de la política social, la estrategia de seguridad pública y la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. La velocidad de los cambios se ha visto favorecida por el hecho de que el partido Morena y sus aliados cuentan con mayoría absoluta en el Congreso, lo que ha permitido realizar reformas constitucionales, como la creación de la Guardia Nacional, y la abrogación de la reforma educativa neoliberal del gobierno de Enrique Peña Nieto.

No es posible aún, en tan corto tiempo de ejercicio gubernamental, efectuar un balance riguroso de las acciones emprendidas por el nuevo gobierno. Por supuesto, como sucede en toda transformación verdadera, existen claroscuros, contradicciones y errores, estos últimos magnificados por sus adversarios, tanto de la derecha como de la izquierda radical anticapita-

lista. En esta breve nota me concentraré en analizar solamente y de manera somera la política macroeconómica del nuevo gobierno y sus alcances, comenzando por referirme, primero, al difícil contexto interno e internacional en que se desenvuelve el nuevo gobierno.

EL CONTEXTO

En el marco internacional destaca la incertidumbre radical que existe sobre el curso de la economía mundial. La crisis económico-financiera global de 2007 está lejos de haber sido resuelta. Las economías de todo el mundo se están desacelerando, unas más (varias en recesión) y otras menos, pero la tendencia general en las tasas de crecimiento es a la baja. Asimismo, persisten las tendencias deflacionarias, con las tasas de interés en su nivel más bajo desde la Gran Recesión de 2008-2009, y en muchos casos en terreno negativo. La política monetaria que fue casi la única arma empleada para combatir la crisis y restablecer el magro crecimiento logrado durante los últimos, da signos visibles de agotamiento. La financiarización de la economía, con su cauda acrecentada de especulación, continúa sin pausa, en bús-

¹ Profesor – Investigador Titular del Departamento de Economía la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), nivel III.

E-mail: artguillenrom@hotmail.com .

quedará de tasas de retorno para los capitales excedentes cada vez más difíciles de conseguir. A ello hay que adicionar la aguda guerra comercial –expresión de la pugna política por la hegemonía– entre Estados Unidos y China y de los síntomas de desintegración del mundo y del “orden institucional” construido durante la globalización neoliberal (Vgr, el Brexit, la inoperancia de la OMC, entre otros).

El segundo elemento a considerar es la correlación de fuerzas cada vez más negativa que existe para los regímenes progresistas en América Latina. El gobierno de AMLO tendrá que bregar con esa adversa realidad. Con la excepción de Venezuela (que enfrenta una aguda crisis económica y social provocada, en buena medida, por la agresión imperialista de Estados Unidos y la acción subversiva de la ultraderecha), de Bolivia y de Uruguay, la región ha enfrentado un proceso de regresión neoliberal por la vía electoral en Argentina y Ecuador, y mediante un golpe de estado instrumentado desde el poder judicial en Brasil.

El tercer elemento, y quizás el obstáculo más importante que enfrenta la 4T, es la incesante “guerra política” declarada por segmentos importantes de la oligarquía, la fracción hegemónica del poder. La supuesta “luna de miel” entre el gobierno y el gran empresariado es más un mito que una realidad. Aunque el capital tiene la necesidad imperiosa de continuar la reproducción de sus capitales, y si bien algunos grandes empresarios han ofrecido mantener sus inversiones y hasta colaborar en proyectos detonados por el gobierno, el núcleo duro de la oligarquía difi-

cilmente aceptará pasivamente renunciar a los privilegios conseguidos durante los treinta años del periodo neoliberal, si, sobretodo, el gobierno de AMLO mantiene su intención, reiterada desde la campaña presidencial y refrendada en su plan de gobierno, de separar el poder político del poder económico.

La guerra de desgaste del nuevo gobierno está soportada por el “periodismo de guerra” practicado por los principales medios hegemónicos de comunicación: TV, radio y prensa escrita, en los cuales los comentaristas objetivos y realmente independientes se cuentan con los dedos de las manos. Más que amainar la guerra de posiciones, tiende a arreciar.

EL PROGRAMA ECONÓMICO DE LA 4T Y LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

Uno de los objetivos de la nueva administración es recuperar el crecimiento de la economía nacional. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) plantea un crecimiento promedio de 4% durante el sexenio y cerrar en 2024 con un crecimiento del 6%.

AMLO ha señalado en diversas oportunidades, que su gobierno involucra un cambio de régimen y significa el fin del neoliberalismo. En el PND, se afirma que “tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales (2019)”. Varias de las políticas del gobierno apuntan en esa dirección como

son el fin de las privatizaciones; el restablecimiento de la rectoría económica del Estado y la intención de elevar la inversión pública; la recuperación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para aspirar a la autosuficiencia energética; la reorientación del modelo de desarrollo hacia el mercado interno y a la disminución de las desigualdades regionales y sociales; la elevación de los salarios por encima de la inflación; la recuperación de la autosuficiencia alimentaria; y dejar de recurrir al endeudamiento externo como mecanismo de financiamiento.

Dichas acciones significan, sin duda, un alejamiento de las políticas neoliberales del Consenso de Washington. Se impulsa un nuevo estilo de desarrollo, una nueva estrategia, pero dichos cambios, aunque muy importantes, no involucran el fin del modelo neoliberal. Y ello porque la base fundamental de este modelo es la globalización financiera y las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) asociadas con su funcionamiento. Tasas de interés positivas y altas, moneda sobrevaluada y equilibrio fiscal responden, en lo fundamental a la necesidad de atraer flujos de capital externos y evitar la fuga de capitales. Esos mecanismos son el “núcleo duro” del neoliberalismo, y son los causantes principales del “estancamiento estabilizador” que rige en México desde el gobierno de Salinas de Gortari.

La experiencia brasileña durante los gobiernos de Lula y D. Roussef es reveladora respecto de los peligros de no tocar las políticas macroeconómicas determinadas por la globalización financiera. Cunado en

su segundo periodo cuando Roussef intentó aplicar políticas macro más amigables al crecimiento, la inflación devoró sus intenciones y la acción política de la derecha condujo a su impeachment, lo que fue calificado como un golpe de estado instrumentado desde un corrupto sistema judicial.

En el terreno de las políticas macroeconómicas, el gobierno de AMLO mantiene el mismo paquete de políticas que los gobiernos neoliberales anteriores. En el PND (2019: 48-49) se postula, que “se respetará la autonomía del Banco de México”, “no se gastará más de lo que ingrese en la hacienda pública”, ni “habrá incrementos de impuestos en términos reales”. En otras palabras se mantendrá una política monetaria restrictiva, se buscará el equilibrio fiscal y se tolerará la apreciación cambiaria. Es comprensible que el gobierno de AMLO opte por una política macroeconómica conservadora, si se toma en consideración el entorno de hostilidad política por parte de un segmento importante de la oligarquía y de la derecha, y ante la incertidumbre sobre el curso de la economía mundial.

Para detonar el crecimiento económico e instrumentar nuevas políticas de desarrollo se apuesta a la lucha en contra la corrupción y la impunidad como principal mecanismo de financiamiento de la inversión pública y de los programas sociales. La erradicación de ambas lacras tiene, sin duda alguna, un alto simbolismo político en una sociedad harta de la desigualdad, así como del saqueo y el despojo de la riqueza nacional. La llamada “austeridad republicana” puede contribuir igualmente

de manera favorable a la reactivación económica en el corto plazo, si los recursos ahorrados estimulan la demanda y se trasladan a la inversión, Pero pronto, sino es que ya, está mostrando sus insuficiencias.

En el mediano plazo, la necesaria expansión de la alicaída inversión pública tendrá que descansar en la puesta en marcha de una reforma fiscal redistributiva que grave a los sectores concentrados del capital. México es uno de los países con menor carga fiscal de América Latina. Según datos de la CEPAL, en 2017 los ingresos tributarios representaron apenas, el 16% del PIB, prácticamente la mitad de lo gravado en Argentina (30.3%) y en Brasil (30.3%). Solo con una reforma fiscal progresiva podríamos comenzar a superar de manera efectiva el estancamiento que nos agobia, el cual se acentuaría seriamente, y hasta podría desembocar en una recesión, si el gobierno de Trump cumple la amenaza de elevar los aranceles a las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense.

Referencias bibliográficas-

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 (2109). México, Presidencia de la República. <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>

MÉXICO 2019: EL DESAFÍO INELUDIBLE DE LA CONTRAHEGEMONÍA

Luis Arizmendi¹

El golpe que ha puesto Trump, amenazando con establecer aranceles desde el 5% para ir aumentando mes a mes hasta llegar al 25%, es una ventana a la alta vulnerabilidad impuesta por la nueva forma de subordinación global fundada por EU sobre México. Más aún, pone al descubierto la gravedad de su presión para llevarla más lejos, y, por eso, enfrenta la nación a un desafío histórico mayúsculo. Esta ofensiva no se remite a ser puramente comercial y migratoria. Constituye un golpe que apunta a desestabilizar el proyecto de Estado que propulsa López Obrador buscando subordinarlo para insertarlo en la geopolítica neautoritaria del capitalismo estadounidense. Podría significarse el inicio del quiebre del proyecto de un Estado liberal de paz.

SUBORDINACIÓN GLOBAL Y AMENAZA DE RECESIÓN

Por ser el único país que aplicó al pie de la letra, durante más de tres décadas y media, el Consenso de Washington, en México se estrenó una nueva forma de subordinación Norte/Sur: la subordinación global. Todos los núcleos estratégicos de los sectores económicos que un Esta-

do debe tener bajo control para ejercer soberanía económica, están intervenidos y puestos bajo dominio del capital transnacional y de los grandes capitales privados mexicanos pero antinacionalistas. Petróleo, gas, refinación, agua, alimentos, banca y mucho más, está bajo dominación directa del capital privado, ante todo de las grandes corporaciones de EU. La subordinación global conforma la plataforma de una subordinación de corto, medio y largo plazo.

Ningún Estado del tamaño de México ha tenido jamás en la historia de la economía mundial una subordinación de este orden sin invasión armada o dictadura militar.

El proyecto de un Estado liberal de paz que apenas ha bosquejado López Obrador enfrenta, entre otros pero por principio, dos retos enormes: revertir la barbarie impuesta por la política de muerte como fundamento de múltiples modalidades de renta criminal y avanzar en sentar las premisas históricas para la superación de la subordinación global. Superación que requeriría tres sexenios, quizás poco más. Ante los riesgos que acarrea la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI, los tiempos están contra reloj. El golpe de Trump apunta a cerrar paso a la asunción de ese doble reto histórico e impedir que en Mé-

¹ Director de la revista internacional *Mundo Siglo XXI*. Autor de *El Capital ante la crisis epocal del capitalismo*, IPN, México, 1ª reimpression, 2019. Junto con Jorge Beinstein, de *Tiempos de peligro: Estado de Excepción y Guerra Mundial*, Plaza y Valdés, México, 2018.

xico avance la lucha por la soberanía nacional.

La amenaza de los aranceles exhibe tres delicadas vulnerabilidades impuestas a México por la subordinación global.

1) Una grave subordinación de los procesos de reproducción del capitalismo mexicano al capitalismo estadounidense. Automóviles, autopartes, equipos de cómputo, eléctricos, de comunicación, médicos, de video y televisores fueron 7 de las 10 exportaciones principales de México a EU, en 2018, según el Departamento de Comercio de este último. A las que hay que sumar petróleo, por un lado, y frutas y vegetales, por otro. Que 80% de las exportaciones mexicanas se realicen hacia una sola potencia mundial es una auténtica brutalidad. Exhibe el desaprovechamiento de las fisuras abiertas en la disputa por la hegemonía mundial y la conversión de la economía mexicana en un gran maquiladora internacional subordinada a EU y sus cadenas de producción multinacional.

2) La subordinación energética espuria de México a EU impuesta por la desindustrialización estratégica de PEMEX. México posee una de las mayores reservas de petróleo, y, a la vez, es el país petrolero con la menor capacidad de refinación, ya que cuenta sólo con 6 refinerías. No tiene ni el 5% de las refinerías de EU, que, con la mayor potencia de refinación mundial, tiene 152. Japón, que se ubica en la 76ª posición en el ranking de las reservas probadas de petróleo crudo, tiene menos del 5% de las reservas mexicanas, pero es el quinto país con mayor capacidad de refinación. La desindustrialización pro-

gramada o estratégica de PEMEX se impuso para conversión artificial de la renta petrolera de fuente de renta nacional en fuente de renta transnacional espuria. 80% de las importaciones de gasolina por México provienen de EU: constituye un enorme tributo artificialmente impuesto por subordinación tecnoenergética. Línea crucial de la subordinación global.

3) La subordinación alimentaria espuria de México a EU impuesta por el desfinanciamiento estratégico del campo. México, el país cuna del maíz, ha sido convertido en el mayor importador de maíz en el mundo. Pasó de ser prototipo de la soberanía alimentaria en el siglo XX a ser prototipo de la subordinación alimentaria en el siglo XXI. 99% del maíz que México importa proviene de EU, que nos vende grano transgénico plantado por Monsanto: constituye una alta vulnerabilidad impuesta artificialmente por la subordinación global. No es que México no pueda autoproveerse de alimentos, es que el capitalismo "neoliberal" produjo un daño al campo en tal magnitud que recuperar la soberanía alimentaria nos llevaría dos décadas, quizás menos si se arrancara ya.

Sobre esta triple vulnerabilidad, la amenaza de los aranceles por Trump, más bien, representa la amenaza de una recesión inducida contra la economía mexicana.

El impacto de aranceles ilegalmente impuestos, violando flagrantemente los acuerdos internacionales firmados entre México y EU, sobre un volumen de importaciones correspondientes a 350 mmd anuales, conduciría a la pérdida de 1.2 millones de empleos, la presión de la clase

dominante por un alza a 10% del IVA y a escenarios de caída del PIB en un punto porcentual o muy posiblemente más.

Peor que el impacto en la maquila y su correspondiente ola de desempleo, sería el impacto por subordinación energética y la importación de gasolina con su concomitante efecto dominó sobre el sistema total de precios. A lo que hay que agregar el impacto al campo mexicano, que no produce para garantizar la soberanía alimentaria nacional, pero si hortalizas y frutas para EU. El peligro es real: la amenaza de aranceles ilegales representa para México la amenaza de una recesión inducida.

MIGRACIÓN FORZOSA Y TENDENCIA NEOAUTORITARIA EN EL ROL DE “TERCER PAÍS SEGURO”

EU está intentando someter a México a un cul de sac. Los primeros 45 días, acordados para que México comience a impedir el paso del flujo migratorio hacia EU, conforman la 1ª etapa de un proyecto duramente dirigido, en una 2ª etapa integrada por un nuevo plazo de 45 días, a presionar para convertir al Estado mexicano en “tercer país seguro”. Aunque desde la 1ª etapa, México queda reconfigurado como un Estado que recurre a la militarización, ante todo en la frontera sur pero en general a lo largo del país, para contener los flujos de migración forzada.

Es muy importante percibir que EU busca insertar a México en una metamorfosis neoautoritaria del proyecto original de “tercer país seguro”.

En el marco de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Ginebra, Suiza, en 1951, surgió el proyecto “tercer país seguro”. Originalmente, respondía a una configuración histórica liberal de las relaciones interesestatales. Los Estados, interviniendo como contrapeso ante la violencia político-destructiva capitalista, firmaban un pacto de este orden para proporcionar protección a solicitantes de asilo que huyen de un escenario de peligro. Cuando un migrante abandona su país y solicita asilo en un país distinto, un tercer Estado queda legalmente establecido como “tercer país seguro” en tanto se compromete no sólo al principio de “no devolución”, sino a ofrecer cobertura de derecho al empleo, la vivienda, la salud y la educación. De ahí que, la ONU planteara que este estatuto sólo debería asignarse a Estados en condiciones de cumplir los mismos estándares de cobertura que el Estado inicialmente solicitado.

En la vuelta de siglo, con la transición hacia un capitalismo cada vez más violento, a la violencia político-destructiva se sumó la violencia económico-anónima como fundamento de una migración forzada cada vez mayor. La mundialización de la pobreza y su drástica agudización en el Sur, la crisis alimentaria global y los impactos de la crisis ambiental mundializada, han contribuido sobremedida a acrecentar de modo inédito el flujo de la migración internacional forzada. Si la pobreza extrema se volvió tema de derechos humanos es porque, ciertamente, la vida de los conjuntos sociales que la padecen está en peligro.

En 2016, Turquía firmó un pacto con la Unión Europea que le imprimió una re-

configuración radical al rol de “tercer país seguro”. Para impedir el flujo de migración forzada proveniente de África y Medio Oriente, pese a que el acuerdo consiste en que por cada migrante forzado que se quede en Turquía, otro lo hará en algún país de la UE, hasta cubrir una cuota de 72 mil; de facto Turquía ha quedado autorizada para encarcelar y luego deportar migrantes y refugiados, y por supuesto levantar vallas y muros en sus fronteras. La tendencia del capitalismo neoautoritario en el siglo XXI está propulsando hacer de la militarización y la violación de derechos humanos la regla en el manejo de la migración internacional forzada.

La migración a nivel mundial está en aumento. Según el Informe 2018 de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, en 2017, el número de migrantes internacionales alcanzó la cifra

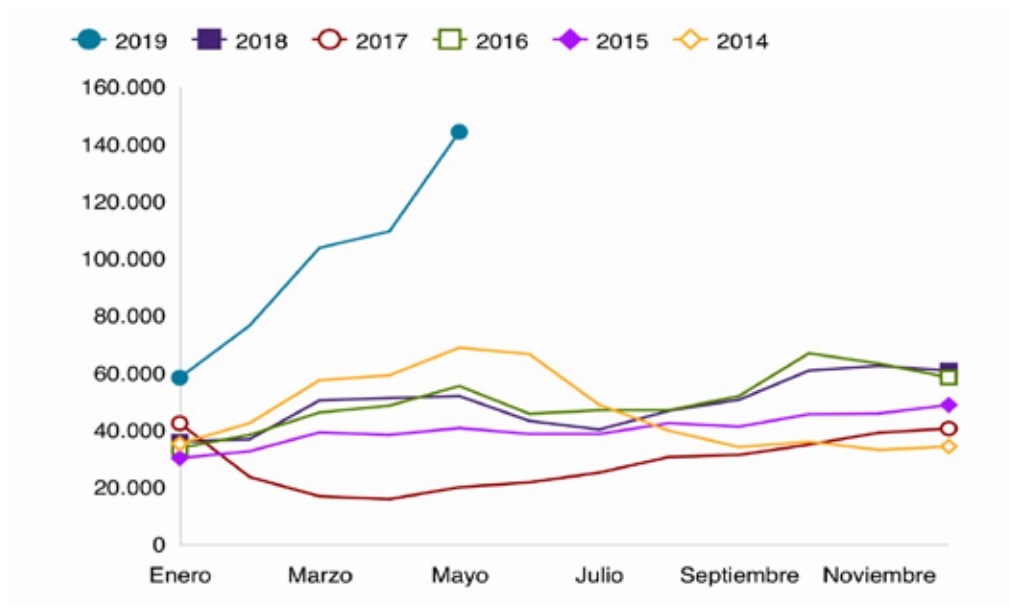
récord de 258 millones, lo que representa un incremento del 49% respecto del año 2000, cuando correspondía aproximadamente a 173 millones. Si se le contrasta con el período previo al “neoliberalismo”, emerge que representa un aumento del 303% respecto del año 1970, cuando su magnitud alcanzaba los 85 millones.

En este marco, la migración forzada ha adquirido una dimensión sin precedente. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para fines de 2015, ya existían 65.3 millones de personas desplazadas forzosamente. Casi 6 millones más que el año anterior. La crisis epocal del capitalismo del siglo XXI contiene como una de sus dimensiones esenciales la mayor crisis de migración forzada en la historia de la mundialización.

EU es el destino al que mayor cantidad

Gráfica 1

Detenciones en la frontera sur de EU : Detenidos y rechazados



Fuente: U.S. Customs and Border Protection.

de migrantes buscan arribar: aproximadamente el 20% de la migración global. México se ha convertido en epicentro geopolítico de la alteración de las rutas de migración forzada regulares Sur/Norte. El exorbitante aumento de la migración forzada, proveniente no sólo de Centroamérica, sino también de Asia y hasta África, pone al descubierto un proceso trágico crucial: la derrota del monopolio defensivo de los Estados del Sur sobre sus recursos naturales excepcionalmente ricos y la imposición de una sobreexplotación brutal sobre su fuerza de trabajo, que ya era extremadamente barata pero así es puesta en condiciones de peligro (ver Gráfica 1).

El drama del país que Roque Dalton definió como “el pulgarcito”, El Salvador, refleja las relaciones de poder Norte/Sur impuestas por EU sobre el Triángulo Centroamericano, que incluye a Honduras y Guatemala. A partir de los ochenta, la migración forzada centroamericana creció debido a las guerras civiles y las masacres sobre campesinos e indígenas realizadas por ejércitos de esos países y paramilitares vinculados a Washington. En las calles de Los Ángeles, compuesta por salvadoreños ante todo, aunque también por hondureños y guatemaltecos, surgió la Mara Salvatrucha. Cuyos miembros, luego de ser encarcelados en EU, empezaron a ser deportados a comienzos del nuevo siglo, sentando bases en Centroamérica para producir desde ahí su internacionalización. La actual migración forzada salvadoreña es resultado, por principio, de la pobreza extrema y la violencia político-decadente. A la par, el impacto de la crisis ambiental en la población rural y la caída

en 60% de los precios del café en Guatemala –derivados de la producción mecanizada en Brasil, comprada a precios ínfimos por Starbucks–; así como la configuración de Honduras como uno de los Estados más violentos del mundo, cuyo gobierno deriva de un golpe de Estado apoyado por Trump; han hecho del Triángulo Centroamericano una fuente creciente de migración forzada.

El fenómeno inédito de la migración forzada organizada en grandes caravanas para cruzar el territorio nacional constituye una implacable expresión histórica del capitalismo necropolítico en México. Los migrantes centroamericanos huyen de un horror para cruzar otro. En México, la política de muerte se hace valer para imponerles esclavización de la fuerza de trabajo, trata de blancas e integración violenta a las filas de la economía criminal. Dos grandes masacres son simbólicas en esa violencia político-decadente: la de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012. La continuidad del horror y su impunidad dieron pie al surgimiento de las grandes caravanas como forma defensiva de la migración forzada centroamericana.

Sea o no que México firme el pacto para convertirse en “tercer país seguro”, EU está logrando imponer su geopolítica neoautoritaria, obligando a nuestro Estado a no asumir el principio de “no devolución” con que el derecho internacional protege a migrantes forzados. Dado que está imposibilitado para brindar condiciones de residencia a conjuntos migratorios destinados a ser cada vez mayores, México está siendo conducido hacia prácticas violatorias

del derecho internacional produciendo el retorno de los migrantes forzados a situaciones de violencia político-decadente de las que vienen huyendo. Las relaciones de poder de EU producen crisis migratoria en Centroamérica y México es llevado a ejercer administración represiva de la migración forzada. La pinza geopolítica neoautoritaria se está conformando con Guatemala presta para firmar ser un (falso) “tercer país seguro” y EU, según informa Los Angeles Times, avanzando en configurar los centros para migrantes como auténticos campos de concentración.

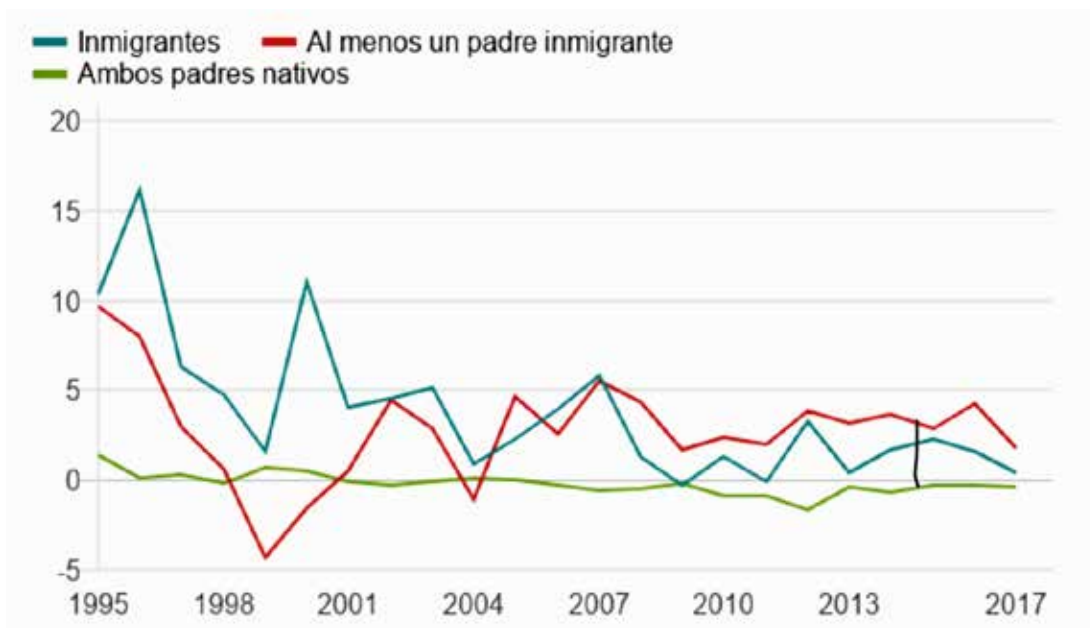
La respuesta de EU, que pone por delante violencia político-destructiva como arma para administración represiva de la migración forzada, no se mide por el porcentaje que significan los migrantes respecto de la población estadounidense, tampoco

respecto de la inversión en infraestructura para brindarles asilo –lo que una reconfiguración liberal del Estado bien podría llevar a cabo–. Se mide por la tendencia al cambio en la rapport de forces demográfica al interior de EU para mediados del siglo XXI. Aunque el capitalismo estadounidense requiere ejército de reserva internacional estancado, los crecientes flujos de migración forzosa le son contraproducentes. Al interior de EU se está librando una auténtica guerra demográfica.

Si bien la tasa de crecimiento demográfico está disminuyendo para el conjunto social cuyos ambos padres son migrantes, va en aumento la tasa de los hijos con un padre migrante, mientras la tasa de reproducción de la población originalmente estadounidense está ya por debajo de la renovación de su magnitud actual (ver Gráfica 2).

Gráfica 2

Índice de crecimiento demográfico según identidad de los padres



Fuente: Hamilton Project, Current Population Survey.

Se calcula que, de aquí al 2060, la población estadounidense crecerá aproximadamente en 100 millones, para pasar de 326 a 417 millones. Un incremento casi del 30% de la población, que traerá consigo una profunda recomposición étnica. Los blancos protestantes son cada vez de mayor edad y con menor descendencia. Para 2044, se prevé que más del 50% de la población en EU corresponda a alguna clase de minoría étnica. Para 2060, la población blanca americana descenderá del 62% a sólo 43%, mientras la población hispana pasará del 18% a casi el 29%. Un margen cada vez más delgado, apenas arriba del 10%, diferenciará la población de blancos americanos de la población hispana. La tendencia de esta recomposición demográfica bien podría acelerarse con el explosivo crecimiento contemporáneo de la migración forzada.

No hay pura demagogia electoral. La tendencia apunta a modificar la correlación de fuerzas en la lucha mundializada de clases Norte/Sur. Ahora, el Sur está en el Norte. A esta tendencia es a la que responde el proyecto neofascista de Trump desde EU.

EL ESTADO CONTRAHEGEMÓNICO COMO DESAFÍO

EU nunca necesitó anteriormente amenazar al principal discípulo sumiso del Consenso de Washington, México, con el arma de una recesión inducida. Ahora lo hace para obstruir y doblegar la lucha de México por avanzar hacia la soberanía nacional.

Trump apuesta a una ofensiva en doble banda: imponer la subordinación de México a su geopolítica neautoritaria y doblegarlo con el T-MEC. No conforman una antinomia histórica, constituyen una ofensiva complementaria.

La amenaza arancelaria ha encubierto un debate imprescindible: que el T-MEC tiene como uno de sus blancos clave revertir la resistencia contra los transgénicos en México, llevando más lejos la subordinación global con un tratado que busca imponer la subordinación del campo a las biocorporaciones, obligando legalmente a rendirles el tributo que Armando Bartra denomina la “renta de la vida”. Su capítulo 18, sobre propiedad intelectual, compromete la incorporación a la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV 91). Un tratado que otorga derechos de monopolio a las corporaciones transnacionales sobre la creación o el “descubrimiento” de variedades vegetales –eufemismos para referirse a la legalización de la biopiratería y la contaminación transgénica de los más de dos millones de variedades de maíz en México-. El T-MEC no asegura que Trump no lo viole, pero nos introduce en la trampa de apertura a los transgénicos.

La política de precios de garantía para pequeños productores de maíz, frijol y trigo, garantiza la continuidad de la actual producción nacional, pero no revierte la subordinación alimentaria espuria, y, con ella, la alta vulnerabilidad mexicana. Menos aún si Trump consigue imponer mayores importaciones de las mercancías agrícolas estadounidenses. Política de creciente refinanciamiento del campo es urgente si se trata de aprovechar este sexenio para

avanzar hacia la soberanía alimentaria de México en el nuevo siglo.

El anhelo de producir lo que consumimos para que toda amenaza arancelaria le haga a México lo que el viento a Juárez, es decir la clave para el ejercicio de la soberanía nacional, enfrenta al proyecto del Estado liberal de paz ante el reto de asumir estratégicamente el proyecto de Estado contrahegemónico.

El posicionamiento del petróleo como palanca del desarrollo nacional, exige garantizar que, en el año 2022, efectivamente México deja de importar gasolina. Asimismo, requiere que las reservas probables de petróleo, aún no licitadas, queden bajo control directo de un Estado soberano. Mientras tanto deberían aprovecharse las fisuras en la disputa por la hegemonía mundial para avanzar, por principio, en la diversificación de los países a los cuales se envía petróleo mexicano para su refinación. Empezando con China y Rusia. Si el próximo trienio no se dirige hacia la superación gradual de la subordinación energética, EU ya mostró el arma de la recesión inducida para impedir arribar al objetivo de 2022.

China ya ha hecho de México el primer país latinoamericano invitado a incorporarse a la Ruta de la Seda, la mayor ruta comercial en la historia de la economía mundial. Es crucial contrarrestar el peligro de futuras amenazas de recesión, acrecentando el juego de intercambios comerciales con China, Rusia, la UE y América Latina. Y posicionarse en la confrontación tecnológica entre EU y China dándole más campo de acción a la 5G china.

La lucha contra la subordinación global requiere una estrategia multidimensional con perspectiva de corto, mediano y largo plazo, en la cual sean líneas prioritarias la superación tanto de la subordinación energética como de la subordinación alimentaria, pero también impedir la inserción de nuestro país en la geopolítica neautoritaria estadounidense.

La Guardia Nacional surgió respondiendo al intento de integración de una nueva fuerza armada para enfrentar la barbarie de la economía criminal. EU intenta imponer una contrafinalidad radical: que se integre a la administración represiva de los flujos internacionales de migración forzada. Lo que terminaría teniendo impacto en los flujos nacionales. Si ya el mando civil constituía una medida de primer orden para poner la Guardia Nacional bajo vigilancia del ministerio público civil, esta recomendación de la ONU se ha vuelto más relevante hoy día.

Las fisuras de la disputa por la hegemonía mundial y Acuerdos con ACNUR podrían aprovecharse para impulsar una política alternativa en el Triángulo Centroamericano.

La misma ofensiva de Trump, dirigida a producir atracción de votantes para su reelección en el año 2020, paradójicamente, exhibe así su flanco débil. La lucha de clases al interior de EU también se viene agudizando. La convocatoria para un acuerpamiento de los mexicanos desde EU contra la política neofascista de Trump no debe dejarse de lado. México podría y debería aprovechar la disputa estadounidense por la contienda electoral para des-

estabilizar la tendencia neoautoritaria.

Hacia el interior de México la convocatoria para cohesionar múltiples movimientos sociales en la lucha por la soberanía nacional es totalmente factible. Su potencialidad mayor residiría en producir desarrollo de una cultura política antifascista. Resultaría preventivo ante los gérmenes de xenofobia que comienzan a surgir.

Lo que el Estado mexicano está intentando obtener es tiempo ante la amenaza de la recesión inducida, pero eso conduce a tiempo de encrucijada. Sólo tendrá sentido histórico si se asume el desafío de impulsar política estratégica de contrahegemonía.

LA CORRELACIÓN DE FUERZAS EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Magdalena Galindo¹

Ciertamente la elección de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, así como la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la de Senadores para la Coalición Juntos Haremos Historia, a lo que se suma el triunfo de varios gobernadores en los estados, ha generado desconcierto no sólo entre sus adversarios naturales, el PRI, el PAN, la gran burguesía y sus aliados, sino también en los medios y periodistas progresistas y aun en la llamada izquierda social. No es para menos, se trata de un cambio histórico. Es la primera vez, después del sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) en que la izquierda asume el poder, después de 60 años de vivir lo que yo caracterizaría como una dictadura de partido, y de 36 años del más despiadado neoliberalismo, que no sólo significó la pauperización sin precedentes de las clases trabajadoras, sino una devastación del país, con la entrega a la inversión privada, nacional y extranjera, de los recursos humanos y naturales de la Nación.

Para intentar entender la coyuntura actual, me parece necesario analizar la correlación de fuerzas sociales. En este sentido, hay que recordar que la crisis económica estructural del capitalismo, que se inicia en los setentas y continúa hasta la fecha, ha provocado cambios fundamentales en la correlación de fuerzas, tanto en el inte-

rior del país, como en un nivel internacional. En México, durante los años sesenta, previos a la crisis, la fracción hegemónica de la burguesía, era, sin duda, la fracción financiera, entendida en su sentido clásico como la unión del capital bancario y el capital industrial. Sin embargo, esa crisis estructural, que tiene como causa fundamental la caída de la tasa de ganancia, ha provocado lo que llamo un desplazamiento del poder hacia el exterior, de modo que hoy la hegemonía, en el interior de México, la detenta la gran burguesía financiera internacional.

Para entender el proceso, hay que remontarse a inicios de los setentas, cuando estalla la crisis estructural, que afecta en un principio a los países altamente industrializados. Ante las trabas en el proceso de acumulación de capital, la gran burguesía financiera, que ya tenía la hegemonía en un nivel internacional, va a responder con un conjunto de estrategias para recuperar, y en algunos casos incrementar, la tasa de ganancia, entre las que se cuentan acciones no económicas como la guerra permanente, y en el terreno económico fundamentalmente el proceso de globalización, cuyo motor es la desintegración del proceso productivo, de manera de llevar los segmentos intensivos en fuerza de trabajo a los países subdesarrollados para explotar la mano de obra barata, y los seg-

1 Profesora de la Facultad de Economía, UNAM.

mentos intensivos en capital y tecnología a los países altamente industrializados. Además, otro cambio sumamente importante es que el capital se va a refugiar en la especulación, lo que va a provocar la hipertrofia del sector financiero. Para desplegar estas estrategias, la fracción hegemónica de la burguesía en un nivel internacional, es decir, la gran burguesía financiera, acompañada por las burguesías nacionales, van a emprender dos grandes ofensivas: una, contra los trabajadores, y otra contra los países subdesarrollados.

La ofensiva contra los trabajadores incluye el descenso de los salarios reales, la flexibilización de los contratos, la eliminación de derechos, la reducción del gasto social de los gobiernos (lo que se conoce como salario indirecto o sea subsidios al consumo, apoyos para vivienda, servicios de salud, educación y un largo etcétera). Además, un ataque frontal a las pensiones, privatizando el sistema, con lo que los fondos se llevan a la Bolsa y se utilizan para financiar a empresas y gobiernos, así como la ampliación del tiempo de trabajo para alcanzar la jubilación, es decir, un recorte a lo que se ha llamado el salario diferido.

En la ofensiva contra los países subdesarrollados, el objetivo es abatir las fronteras económicas, para alcanzar la libre movilidad del capital, esto es que pueda entrar y salir sin trabas de las naciones, en todas sus formas, como capital dinero, como capital productivo y como capital mercancía, a fin de explotar la baratura de la fuerza de trabajo, abatir los aranceles para sus exportaciones, y obtener libre paso a la inversión extranjera, tanto pro-

ductiva como de cartera. Para alcanzar estos objetivos, va a imponer (con la anuencia, y frecuentemente el entusiasmo, de gobiernos y burguesías nacionales de los países subdesarrollados) las políticas neoliberales. El arma utilizada fue el problema de la deuda y los ejecutores el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, actuando en fatídica mancuerna.

Para México en particular, el proceso de globalización y las políticas neoliberales determinaron, como decía antes, el desplazamiento de la hegemonía hacia el exterior. La primera manifestación del inicio del cambio en la fracción hegemónica se presenta al final del sexenio de José López Portillo, con la nacionalización de la banca (1982), en la que el Estado mexicano se ve obligado a golpear a la fracción financiera de la burguesía nacional, que había detentado la hegemonía desde los sesentas, para garantizar el pago del servicio de la deuda, al acreedor mayoritario, el gran capital financiero internacional. Por supuesto, esa es la primera señal, pero no se trata de un cambio que se produzca a través de un solo hecho, sino de un proceso en el que el capital financiero internacional, con el estadounidense a la cabeza, va determinando cada vez con mayor fuerza, las políticas aplicadas en nuestro país, hasta llegar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las llamadas reformas estructurales, de las cuales, las más graves fueron la reforma laboral, la energética y la educativa, todas diseñadas desde el extranjero y concebidas para favorecer precisamente a la fracción hegemónica en el interior de México, a la fracción financiera internacional.

El cambio de hegemonía y las ofensivas contra los trabajadores y contra los países subdesarrollados, ocasionaron una devastación de las condiciones económicas, políticas y sociales del país y, por supuesto, afectaron la correlación de fuerzas, pues la propia crisis del capitalismo y las estrategias para enfrentarla y recuperar la tasa de ganancia, determinaron una derrota de las clases trabajadoras y un debilitamiento de sus instrumentos de lucha, como los sindicatos o la huelga. No obstante, precisamente por la devastación de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras, puede afirmarse que en las últimas décadas se ha observado una especie de insurgencia social, pues son miles las organizaciones que han protestado contra el neoliberalismo y cientos de miles las marchas, plantones, paros, huelgas y demás. En esas movilizaciones, se emplearon todas las formas de lucha y también una enorme variedad de demandas, como libertad de presos políticos, exigencia de presentación de desaparecidos, reivindicaciones de otros derechos humanos, alza o pago de salarios, plazas de empleo, defensa de la organización sindical, defensa de la tierra, combate a proyectos anticológicos, alto a la inseguridad, combate a los feminicidios y por la equidad de género, la reconstrucción después de los sismos, y una larga lista que incluye hasta el despido de una directora de escuela, o la provisión de agua en una colonia. Sin embargo, a pesar de que puede hablarse de una insurgencia social, no se ha podido remontar la correlación de fuerzas, debido a la pulverización de las protestas y las demandas, ya que en su mayoría las distintas

organizaciones no llegan ni siquiera a los 100 integrantes y las demandas no se han podido incorporar en un proyecto nacional, sino sólo aluden a problemas específicos o conflictos locales.

Hay que destacar que aunque la hegemonía en el interior de México la detenta hoy la gran burguesía financiera internacional, para ejercerla en concreto necesita valerse del Estado mexicano, lo que significa que tiene que aliarse, o mejor sería decir asociarse, con la gran burguesía financiera nacional y con los partidos políticos en el poder. Y en efecto, desde 1982 hasta 2018, los sucesivos gobiernos, del PRI y el PAN, impulsaron las políticas neoliberales, incluidas las reformas estructurales, que devastaron el país y pauperizaron a las clases trabajadoras, me refiero a los campesinos y a los asalariados de todos los niveles, y que también afectaron a un sector de la burguesía.

La importancia del triunfo en toda la línea de la coalición Juntos Haremos Historia, está, desde mi punto de vista, en que ha representado un duro golpe para el PRI y el PAN, pues ya no pueden ejercer de modo directo el poder, ya que no tienen en sus manos el Estado. Hoy, tanto el PRI como el PAN y no digamos el PRD, se debaten entre la dispersión y el enfrentamiento interno. Sin embargo, la debacle de los partidos no genera automáticamente el cambio en la correlación de fuerzas, puesto que la hegemonía sigue estando en la fracción financiera internacional, a la que se ha asociado la gran burguesía nacional, o sea un reducido grupo de empresarios, que, aunque en forma subordinada, han conseguido enriquecerse a muy altos

niveles, al amparo del neoliberalismo.

En la coyuntura actual, frente a la llegada al poder de López Obrador, tanto la fracción de la burguesía internacional, como la fracción nacional, están intentando acomodarse a la nueva situación, buscando hacerse de contratos en los proyectos de la nueva administración, por un lado, y por otro patrocinando un ataque frontal a las políticas del nuevo gobierno. En este ataque, los medios de comunicación, están jugando un papel de primera importancia, tanto porque siempre han estado aliados a la gran burguesía, como porque los recortes presupuestales los han afectado de manera directa con la disminución del gasto público en comunicación social, así como con el final de la práctica de premiar y castigar con millonarios sobornos a medios y periodistas, y como dijo Alberto Barranco Chavarría, refiriéndose al soborno, popularmente conocido como chayo, “muerto el chayo, empezó la rabia”.

Pecaríamos de ingenuos, si en esta coyuntura no observamos las estrategias que ha seguido el capital financiero internacional en los últimos tiempos. En América Latina, frente al surgimiento de gobiernos que sin ser socialistas, ni anticapitalistas, sí tienen un tinte progresista y una voluntad nacionalista, la estrategia fundamental, impulsada principalmente por Estados Unidos, pero acompañado por varios países europeos, ha sido la que se ha identificado como golpes de estado blandos, es decir que a través de parlamentos, de acusaciones jurídicas, de la fuga de capitales, el acaparamiento de productos y de rabiósas campañas mediáticas, han conseguido defenestrar a los gobiernos progresistas y

entronizar a sus personeros de ultraderecha.

La primera responsabilidad de la izquierda social hoy, en México, es evitar una regresión de esas dimensiones. Y eso quiere decir, estar atentos y prontos a combatir la campaña de mentiras que se difunden en los medios, así como a denunciar las acciones concretas, incluso cuando no sean muy exitosas, como la reciente marcha de la derecha en la que ya pedían la renuncia de López Obrador.

No creo que ni el más fanático admirador del Presidente, afirme que se trate de un gobierno que no comete errores. Tampoco creo que la izquierda social deba renunciar a sus demandas en aras de apoyar a López Obrador. Pero lo que es indispensable, precisamente por la correlación de fuerzas, es que no aportemos ni un mínimo grano de arena para que la ultraderecha, como un Macri, un Bolsonaro o un Guaidó, asuma el poder del Estado mexicano.

Para cumplir con este objetivo, lo primero es realizar un análisis propio de la realidad. Por ejemplo, del presupuesto, lo que dicen las cifras, es que, en cuanto al total, no se trata de un presupuesto restrictivo, pues no hay una disminución, sino un aumento en términos nominales de 10 por ciento. Si en general hay un aumento, lo que cambia es que hay una reestructuración, pues al revés de los recortes del pasado que se asignaban principalmente al gasto social y a Pemex, ahora son precisamente la empresa petrolera y el gasto social los que reciben los mayores aumentos. En particular por los programas espe-

ciales que se incluyen entre los proyectos prioritarios de la administración, como el de colonias marginadas, con 8 mil millones; Sembrando Vida, 15 mil millones; Pensión para personas con discapacidad permanente, 7 mil millones; Pensión para adultos mayores, 100 mil millones; Becas Benito Juárez para estudiantes, 17 mil 300 millones; Jóvenes construyendo el Futuro, 44 mil 300 millones; Crédito ganadero a la palabra, 4 mil millones; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, 6 mil millones.

En lo que atañe al reparto entre Secretarías, hay cambios importantes. Unas reciben aumentos y otras disminuciones en sus gastos. Entre las que aumentan, la más notable es la de energía, cuyo presupuesto se incrementa un 1002 por ciento, al pasar de 2 mil 470 millones a 27 mil 229 millones. El otro caso extraordinario es el de la Secretaría del Trabajo, que aumenta de 4 mil 036 millones a 43 mil 269 millones, es decir un 971 por ciento. También reciben aumentos, aunque ya en menor proporción, Turismo (124.3%) Bienestar (46.8 %), Defensa (15.6%), Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (11.9 %), Educación (9.6 %) Marina (2.5%); y Salud, un aumento marginal (1.6%).

Tienen disminuciones, en cambio; Función Pública (-24.3%); Comunicaciones (-21.2%); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (-17.5%); Consejería Jurídica (-14.9); Hacienda (-14.7); Presidencia (-12.7); Agricultura (-9.3%); Fiscalía, antes PGR (-5.5); Gobernación (-5.4); Economía (-5.5%); Relaciones Exteriores (-5.2%); Cultura (-0.2).

Como señalan los datos reales, no hay una disminución del presupuesto, sino una reestructuración, en la que se privilegia en particular a la industria petrolera, con lo cual se busca combatir los peores efectos de la reforma energética, y al gasto social, aumento que persigue varios objetivos, por un lado atender a los grupos más golpeados por el neoliberalismo; por otro, combatir las causas sociales del clima de inseguridad que vive el país, y finalmente, reactivar el mercado interno, pues previsiblemente ese gasto impulsará el consumo de amplias capas de la población. Esta realidad es exactamente lo contrario de lo que han propagado a gritos por los medios de comunicación, tanto los grupos empresariales, como los partidos perdedores, es decir, los socios y personeros del gran capital financiero internacional. Por eso la tarea fundamental de la izquierda es denunciar las campañas de la derecha y modificar los métodos de lucha de acuerdo con las nuevas circunstancias, de manera que al insistir en las legítimas demandas no sumarse al discurso desestabilizador y falso de la burguesía y sus representantes políticos.